Imprimir

El gobierno del presidente Gustavo Petro, primer gobierno alternativo y de izquierda en Colombia a lo largo de su historia, completa 75 días de gestión y el “derecho de gracia” de los primeros 100 se le ha negado de manera tajante por el campo político de la derecha y la ultraderecha quien arrecia sin tregua sus ataques políticos y mediáticos contra la agenda de la nueva administracion en sus distintos campos: administrativo, legislativo y legal.
Un análisis de la coyuntura debería intentar captar las tendencias centrales del momento para establecer el horizonte de corto y mediano plazo del gobierno del Pacto Histórico y para establecer los escenarios de desempeño del PH, del Frente Amplio, de la coalición de gobierno y del movimiento social.

De entrada, es importante señalar que el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la construcción de la hegemonía política popular y progresistas para sustituir el viejo poder oligárquico y de la ultraderecha histórica colombiana que entro en una bancarrota irreversible, puesta de manifiesto con las grandes movilizaciones sociales y populares del 2019, 2020 y 2021. Al respecto conviene indicar que Gramsci concebía la hegemonía como la dirección política y la búsqueda de la organización del consenso en el conjunto de la sociedad. Inspirado en las concepciones de Lenin, Gramsci amplió el concepto para pensar en las formas hegemónicas en los llamados Estados occidentales. Estas formas se dieron por una combinación de coerción y consenso, encontrándose en una relación de equilibrio en momentos de la “normalidad” de las democracias liberales. En otras palabras, para ser dominante, una clase debe ser dirigente de las clases aliadas y la dominante de las clases contrarias.

Los primeros días, después del 7 de agosto, el presidente Petro tomo decisiones contundentes como la depuración de las Fuerzas Armada y de la policía, excluyendo a reconocidos oficiales vinculados con la violación de los derechos humanos en masacres y vulneración de la vida de lideres sociales y comunitarios. Igualmente avanzo en la configuración de un gobierno de coalición con varias fuerzas políticas para darle sustento tanto a la gobernabilidad como a la gobernanza de su administracion, especialmente en lo atinente al poder legislativo, en el que se escogieron como directivos a destacados líderes

del PH. De la misma manera designo importantes figuras femeninas, indígenas, afros y técnicas en los cargos ministeriales y diplomáticos, reflejando adecuadamente las expectativas del electorado progresista.

De manera sincronizada, desde el 8 de agosto los funcionarios del gobierno echaron a rodar una diligente y eficaz gestión, para entregar al Congreso de la republica proyectos de Acto legislativo y de ley de gran envergadura como la Reforma tributaria, la Ley de Orden público (o de Paz total), la reforma política, la Ley contra el hambre, la jurisdicción agraria, el Acuerdo de Escazú, la revisión del presupuesto para el 2023, la ley para garantizar la protesta social, la reforma laboral, la elección de un nuevo Contralor y otros proyectos de gran impacto nacional.

Al tiempo, desde el ejecutivo, el presidente hizo anuncios claves como la recuperación del Acuerdo de paz del 2016, el anuncio de la reforma rural integral, con la compra de tres millones de hectáreas. Parte de esta ofensiva gubernamental es la organización de los Diálogos Regionales Vinculantes para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, diálogos que han implicado la más amplia participación democrática de la ciudadanía en los mas de 51 eventos programados.

La ultraderecha y su poderosa red de medios de comunicación ha perfilado una brutal arremetida para desprestigiar la naciente administracion, a la que se le ha negado el periodo de gracia, con una muy bien orquestada y creativa campaña de ataques que, por supuesto, incluye las famosas fake news con las que se manipulan y engañan a la multitud como ocurrió en el plebiscito de paz del 2016.

Desde luego, el punto más álgido de la manipulación se localiza en el proyecto de Reforma tributaria que se propone hacer un recaudo cercano a los 25 billones de pesos (5000 millones de dólares aproximadamente) que deben pagar la casta ultra millonaria, beneficiaria de múltiples beneficios tributarios en los últimos 20 años. Los gremios y las corporaciones económicas han desatado un enorme caudal de mentiras para descalificar el nuevo estatuto tributario que busca obtener los recursos para solventar la nefasta herencia fiscal del anterior

gobierno y apalancar las mas importantes medidas sociales del gobierno del PH. Lo que ha ocurrido en estos días en Gran Bretaña con la caída de la señora Liz Truss que quiso imponer una carga tributaria tacheriana (ultra neoliberal) para favorecer a los más ricos quitándoles impuestos, provocando el rechazo popular, resalta las bondades del estatuto tributario Petro/Ocampo.

Al lado de dicho proceso está la situación objetiva de la crisis económica mundial que obviamente nos golpeara, como viene ocurriendo con la revaluación del peso, lo que llevo al presidente Petro al anunciar una tormenta económica para el 2023. Se trata de una crisis estructural del capitalismo como la crisis del 2008 y la asociada con la pandemia del 2020, que refleja una bancarrota general del capitalismo neoliberal.

La gran prensa, la ultraderecha y los principales gremios están utilizando este fenómeno global para destruir el gobierno, lo que se refleja en las tempranas movilizaciones impulsadas por el uribismo, que seguramente crecerán en los próximos días y que requieren un contrapunto del polo popular como la movilización que ya se ha convocado para el próximo 15 de noviembre al cumplirse los primeros 100 días de gobierno.

La tormenta política.

Pero mas que una tormenta económica lo que esta en curso es la construcción social y política de una verdadera “tormenta política” para socavar y bloquear el gobierno nacional en la perspectiva de su destrucción mediante un intento de golpe militar y de procesos judiciales amañados que como se han dado en Argentina y Brasil implicaron 565 días de cárcel contra Lula da Silva.

Por supuesto, un plan de tal envergadura requiere la respuesta del bloque popular y democrática. Bien es sabido que el campo político se mueve con relaciones de poder y correlaciones Políticas. Tenemos el desafío de tantear los ambientes políticos y proceder en consecuencia de manera creativa para contrarrestar el juego (creativo, por cierto) de la ultraderecha. Cruzarnos de brazos es fatal. Hay que tomar la iniciativa y convocar al

movimiento social y popular, ese que protagonizo el levantamiento popular de abril del 2021, tal como se ha planteado con las manifestaciones planeadas para el 15 de noviembre del año en curso.

La estabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro depende de nuestra voluntad de poder, de nuestra creatividad y flexibilidad política, recordando aquella célebre frase de Lenin que decía que en política bien hay que dar un paso adelante y tal vez dar dos pasos atrás para tomar oxígeno y golpear.

Por último, que no de ultimo, tenemos la obligación de consolidar el Pacto Histórico, de definirlo como una verdadera herramienta popular de cambio progresista. El PH tiene que estructurarse como una organización política antineoliberal, alterna a las viejas maquinarias electoreras y clientelares que todavía se niegan a dejar el campo político, merced a sus privilegios y su arraigo capilar en el sentido común de la multitud, que tenemos el reto de modificar elevando la cultura política de la ciudadanía. Es en el sentido común de la gente donde tenemos los mayores desafíos ideológicos y políticos.

Horacio Duque

Foto tomada de: Diario Occidente